

Venezuela: genealogía de la crisis y problemática del cambio

Juan Agulló

Aré en el mar y edifiqué en el viento
Simón Bolívar

Resumen

Venezuela es, seguramente, el síntoma más evidente y extremo del delicado momento sociopolítico por el que atraviesa América Latina. Lo ocurrido allí desde 1989 no es más que el producto de la superposición de dos grandes crisis: 1) la de un modelo de crecimiento hacia adentro, socialmente integrador, pero políticamente excluyente y macroeconómicamente insostenible, y 2) la de un modelo de crecimiento hacia afuera macroeconómicamente viable pero sociopolíticamente excluyente. Por eso, el derrumbe del viejo régimen no debe ser confundido con la promoción de una transformación social que se enfrenta a serios obstáculos estructurales y resistencias políticas por parte de los sectores más rentistas de la población. Comprender la genealogía de la crisis es avizorar la problemática del cambio: esa es la pretensión de este ensayo.

Abstract

Venezuela is, possibly, the most evident symptom of the delicate moment taking place in Latin America. What happened there in 1989 it is only the byproduct of two major crisis: 1) an inward model of development, socially integrating, but politically restrictive and macro economically unreliable. 2) A viable outward growing model but socio-politically polarizing. Thus, the collapse of the older regime shouldn't be understood with promoting social transformation. It has serious structural obstacles. Even the better off economic population doesn't support it. Comprehending the genealogy of the crisis engenders the issue of change: that is the objective of this essay.

Genealogía de la crisis

Durante decenios, Venezuela contribuyó a engranar la maquinaria capitalista mundial siendo objeto, al mismo tiempo, de una dependencia neocolonial y escenario de una sutil segregación social. Ambos extremos impidieron que, en su momento, el Estado moderno fuera proyectado como una instancia de mediación orientada a la institucionalización de consensos políticos y a la reducción de desigualdades sociales. Al contrario, desde el principio, éste fue concebido como un enorme engranaje de reparto de la renta petrolera entre una sociedad de estructura neofeudal y origen oligárquico (Arenas, 2000).

De esa característica fundacional deriva la primera rémora estructural del moderno sistema político venezolano: el bienestar siempre estuvo ligado a las fluctuaciones financieras de un recurso de elevado valor agregado –pero no renovable– como

el petróleo.¹ Además, la estructuración de un débil aparato burocrático fue más consecuencia de una bonanza económica puntual que producto de una estrategia de desarrollo planificada. En realidad lo que se hizo fue –al igual que años más tarde ocurriría con el neoliberalismo– copiar una receta administrativa que, durante años, fue sustentable gracias a los petrodólares.

Como consecuencia de dicho esquema, Venezuela fue más invertida que transformada. Se trató, además, de una inversión regida por criterios clientelares, nunca productivos. Apenas hubo análisis situacionales y, mucho menos, planificación estratégica del desarrollo. La gestión de lo cotidiano se vehiculó a partir de mecanismos como la corrupción y –a medida que fueron decreciendo los rendimientos petroleros– de brutales formas de represión.² Entre 1960 y 1998 salió de Venezuela el equivalente a 15 Planes Marshall.³ Las muertes violentas, mientras tanto, fueron equiparables a las de un país en guerra civil.⁴

El problema de la gobernabilidad comenzó a fraguarse a partir del momento en que el crecimiento económico se contrajo por debajo del 7 por ciento (Baptista, 1997).⁵ Es decir, a partir del momento en el que los precios internacionales del crudo descendieron drásticamente (en 1986 llegaron a cotizar por debajo de los 10 dólares por barril) y el Estado demostró sus limitaciones a la hora de seguir drenando recursos hacia las capas más desfavorecidas de la población. Capas que, como sea, en años anteriores habían logrado incorporarse a ciertas dinámicas y, sobre todo, a valores de consumo (Coronil, 1997; Díaz, 1983), un fenómeno relativamente singular en América Latina.

Fenómeno que, sin embargo, devenido en problema, tuvo una respuesta común: planes de ajuste estructural que incluyeron estrategias focalizadas –típicamente neoliberales– de intervención social (Álvarez, Del Rosario y Robles, 1999);

¹ Entre 1976 y 2001 los ingresos fiscales del Estado venezolano dependieron –en media– en un 40 por ciento del petróleo (ver *Informe Social*, Venezuela, del núm. 1 al 7. ILDIS, 1996 a 2002). Para mayores precisiones con respecto a esta cuestión también pueden consultarse los planteamientos de Roberto Briceño (1990).

² Consúltense al respecto los informes de la sección venezolana de Amnistía Internacional (<http://www.amnistia.org.ve>) desde 1978 y los de PROVEA (<http://www.derechos.org.ve>) desde 1989.

³ Unos 200 mil millones de dólares que, según el Banco Central de Venezuela (<http://www.bcv.org.ve>), habrían entrado al país como ingresos petroleros saliendo, posteriormente, en forma de fuga de capitales.

⁴ Según datos de la sección venezolana del PNUD (<http://www.pnud.org.ve>), sólo entre 1985 y 1994, la criminalidad se incrementó en un 225 por ciento. La media de homicidios antes de la llegada de Chávez al poder fue de 3 mil 204 al año (sólo en 1994 hubo 4 mil 733). En la vecina Colombia –inmersa en una guerra civil desde 1948– el número de muertes que provoca anualmente el conflicto –según Amnistía Internacional– está entre las 3 mil 500 y las 4 mil al año (<http://www.edai.org/temporal/colombia>).

⁵ Asdrúbal Baptista considera el 7 por ciento como el mínimo indispensable para que, aún sin una política redistributiva activa, todas las capas sociales se beneficien del crecimiento. En Venezuela –si bien en 1975 se había producido un primer aviso luego matizado por la recuperación de los precios del petróleo– el año crítico fue 1982 (2.06 por ciento). En realidad preanunció la debacle del año siguiente (1983: -0.34 por ciento). A partir de ahí se vino la devaluación del bolívar y la posterior adopción de los primeros planes de “ajuste estructural”.

los unos liquidaron los fundamentos rentistas del Estado, mientras que las otras pusieron en serio peligro los viejos mecanismos clientelistas de control social. A partir de ahí se configuraron los cimientos de un creciente malestar interclasista.⁶ También los de una espiral de endeudamiento financiero que, pese a perseguir la supervivencia del sistema, no hizo sino acelerar su derrumbe.

En ese contexto coincidieron dos fenómenos preocupantes: por una parte, la creciente frustración de los sectores populares y, sobre todo, de las clases medias ante su pérdida de peso político y poder adquisitivo; por otra, la insuficiencia de servicios públicos e infraestructuras capaces de mitigar el deterioro social. En años precedentes se habían construido carreteras, puentes e incluso aeropuertos pero faltaban escuelas, hospitales y, sobre todo, viviendas dignas.⁷ Esto agravó los términos de una segregación social a partir de la cual comenzó a generarse una frustración cada vez más politizada.

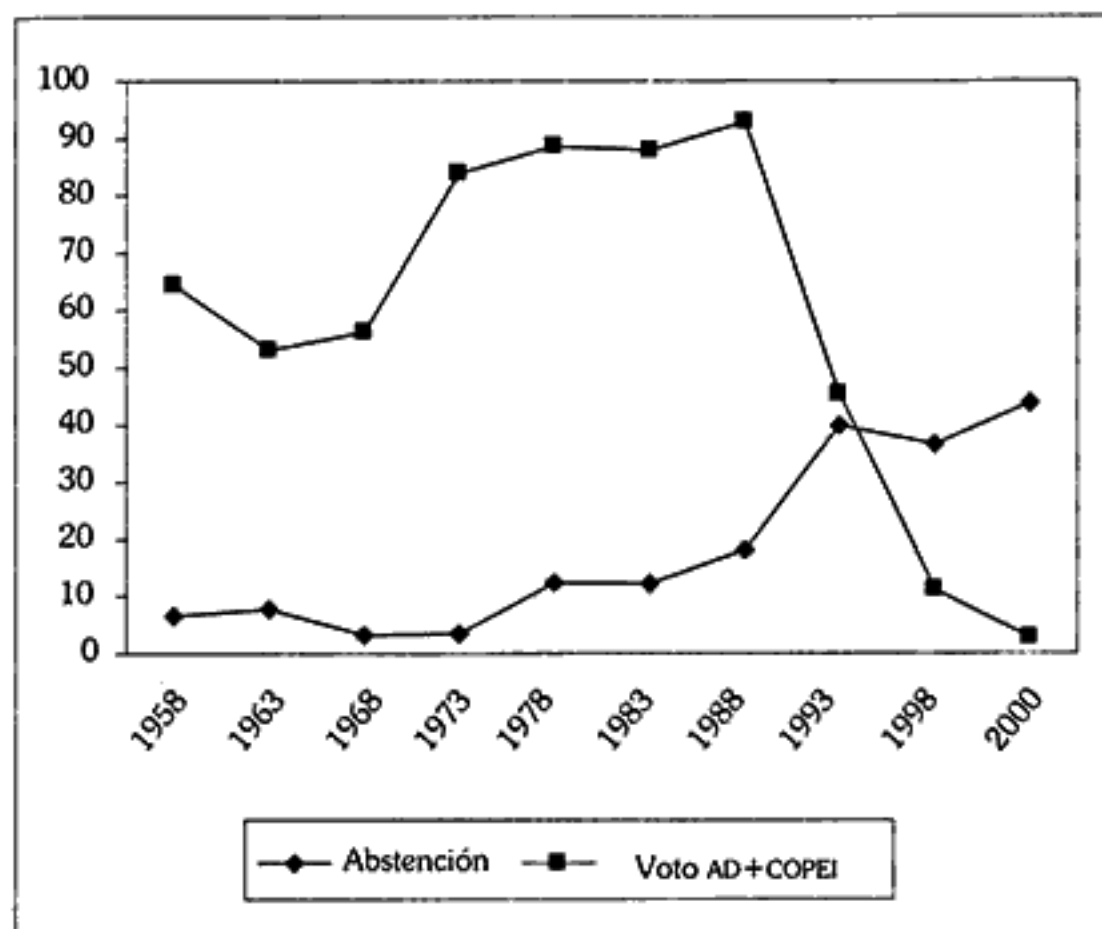
Pese a ello, la acción colectiva enfrentó serias dificultades en términos de canalización institucional. El débil aparato estatal construido –a partir de 1958– alrededor de una estructura partidista bipolar le restó agilidad a un sistema diseñado, ante todo, para evitar la incorporación de elementos “extraños”, fundamentalmente comunistas. En realidad, jamás se había pensado en mecanismos que garantizaran formas de representación social adaptadas a cada coyuntura. La progresión de la abstención electoral demuestra hasta qué punto la identificación sociopolítica con el sistema llegó a decrecer (ver gráfica 1).

Ni siquiera la aparición de nuevas organizaciones políticas de orientación izquierdista, como el Movimiento al Socialismo (MAS) o La Causa R, fueron verdaderamente proporcionales al descontento social existente en el país. Apenas constituyeron la punta del iceberg de un sentimiento colectivo traducido en unas formas populares de organización que –desde mediados de la década de los ochentas– comenzaron a entrar en colisión con la estructura clientelar del Estado (López Maya, 1999). Ya no se trataba –como durante los años sesentas y setentas– de guerrillas más o menos organizadas sino de la construcción de una estructura civil paralela a la oficial.

⁶ Numerosos estudios han abordado la agonía del Estado rentista–corporativo venezolano desde diferentes perspectivas. José Agustín Silva Michelena (1970) describió la vertiente sociopolítica del asunto en pleno auge del régimen *Puntofijista*, cuando más difícil era hacerlo. Ya en plena crisis Steve Ellner (1993) estudió la cuestión desde la óptica del sistema político y la degradación de las condiciones de vida (tema también estudiado por María Teresa Gutiérrez, 1990); Rafael de la Cruz (1989) lo hizo desde el punto de vista de los movimientos sociales que, desde finales de la década de los ochentas, fueron sustituyendo a la vieja estructura clientelista; Peter Grohmann (1996) enfocó todo el proceso a partir del estudio de un barrio popular de Caracas, y Roland Denis (1999) lo abordó desde la perspectiva de las luchas populares.

⁷ El exponencial incremento poblacional (de un 130.9 por ciento entre 1961 y 1999, (<http://www.ine.gov.ve>), así como el rápido proceso de urbanización (de un 40.22 por ciento entre 1950 y 2000, (<http://www.ine.gov.ve>), convirtieron al citado tipo de necesidades sociales en todavía más perentorias que antaño.

Gráfica 1
Evolución de la abstención y del voto a los partidos
tradicionales en Venezuela
(1958-2000)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Nacional Electoral (<http://www.cne.gov.ve>).

En este contexto, las revueltas populares⁸ jugaron un papel fundamental como dinamizadoras de una anárquica y heterogénea amalgama de movimientos sociales. En ocasiones los motines fueron prueba de organización y en otras el origen de la misma. Su sentido sociopolítico, desde luego, trascendió en mucho los motivos puntuales por los que se produjeron. En realidad se trató de fenómenos bastante parecidos a los que tuvieron lugar en algunos países del entorno latinoamericano. Más aún, Venezuela llegó a preanunciar escenarios políticos y sociales, por entonces impensables en otras latitudes.

El papel sociopolítico representado por las clases medias a lo largo de todo este periodo también es similar al que jugaron sus coetáneas de algunos grandes

⁸ A partir de 1983, en Venezuela, los motines populares fueron cada vez más frecuentes en regiones, ciudades y barrios más o menos periféricos. Desde esta perspectiva, el Caracazo (1989) no fue más que una versión amplificada de los mismos que, en este caso, tuvo lugar en el corazón del sistema.

países de América Latina. Expuestas a la presión de los sectores populares (inseguridad pública) y al deterioro de unas estructuras clientelares donde ellas –en tanto que intermediarias– se habían movido a su antojo, comenzaron a perder peso político y poder adquisitivo a pasos agigantados (inseguridad social). La incertidumbre propagada por la clase dominante –sumada a sus débiles formas de organización autónoma– hicieron de ella una clase extremadamente influenciada. Una clase, en definitiva, expuesta a toda suerte de prejuicios sociales, miedos atávicos y delirios de grandeza. Abierta, por ende, a todo tipo de manipulaciones, especialmente a partir del *Caracazo* –en 1989– y del intento de golpe de Estado de 1992. En ambos casos, el fantasma simbólico se consumió: “los cerros” bajaron a “la ciudad”. En términos más elaborados, la exclusión social tomó forma orgánica trasladándose desde la periferia hacia el centro del sistema. Se trató, por ende, de lo que James C. Scott (1990) definiría como un momento *eléctrico*: de repente, el problema de la exclusión se socializó al tiempo que el de la inclusión se politizó.

Así, bruscamente, la marginalidad se convirtió en una preocupación colectiva. Pero para cada quien desde su perspectiva, claro. Para los sectores más acomodados, por ejemplo, frenar el deterioro del sistema equivalió a salvaguardar una maraña de intereses y privilegios de carácter rentista. Para este grupo, “democracia” –al igual que para los sectores medios– no era sinónimo más que de rentas de capital y de paz social (Carballo, 1995; Hillman, 1994); sólo tangencialmente de elección y control. Por eso la mayor preocupación del grupo dirigente radicó en administrar la exclusión y no en promover una estrategia de superación estructural de la misma.

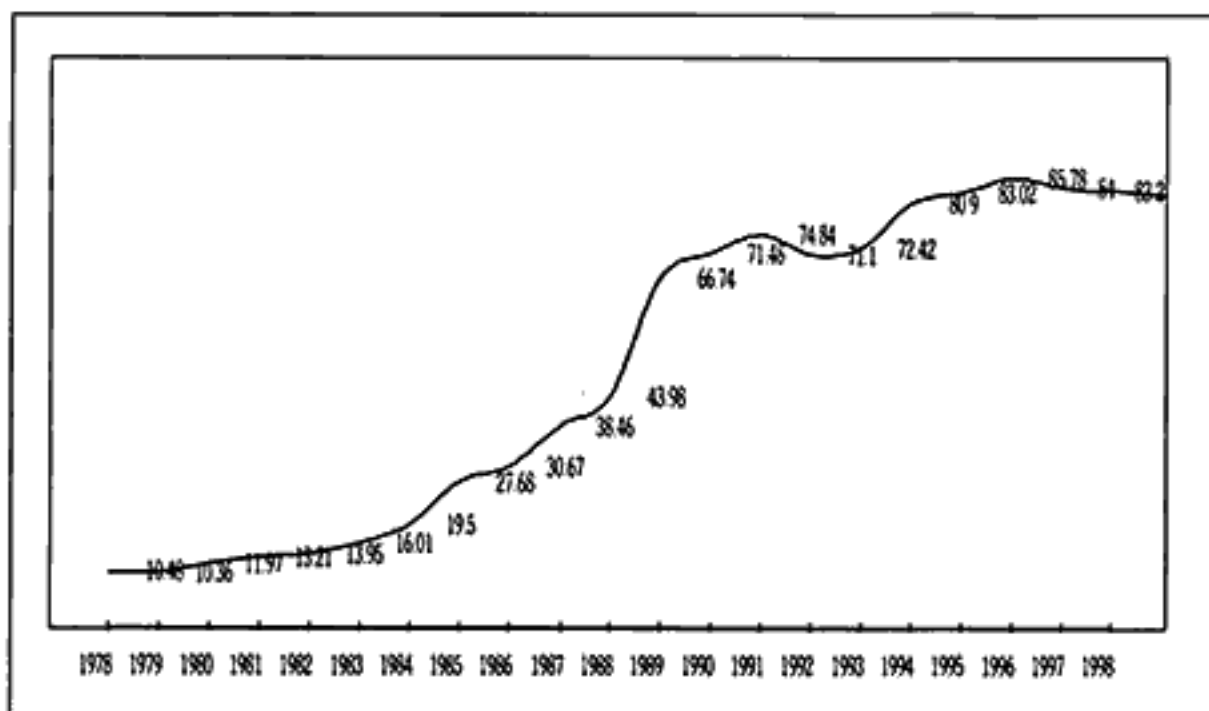
En un contexto tan crítico, el intento de golpe de Estado de 1992 demostró la incapacidad estructural del sistema para promover una gobernabilidad, definida incluso a partir de parámetros típicamente neoliberales. Los rígidos instrumentos institucionales del pasado se mostraron, en efecto, incapaces de promover una redefinición más o menos consensuada del orden establecido (Crisp, 1996; Hillman y Cardoso, 1997). El elevado grado de dependencia externa al que se había llegado a partir de 1983 contribuyó, además, a limitar adicionalmente el margen de maniobra de los actores clásicos del sistema, incluso el de cierta izquierda en vías de institucionalización.⁹

Imposible, pues, partir de Punto Fijo –el acuerdo intra–oligárquico en el que se había sustentado la Constitución de 1961. Desde entonces la población se había multiplicado por tres (de 7 a 23 millones en 40 años) y ya casi nadie se sentía identi-

⁹ Nos referimos, en concreto, a la amalgama de hasta 16 pequeños partidos, asociaciones y grupúsculos de discurso progresista que –alrededor del MAS– apoyaron a Rafael Caldera en su segunda presidencia (1993-1998). A este respecto no hay que olvidar que el núcleo original del MAS se formó a partir de reinsertados de la guerrilla durante la década de los setentas (Steve Ellner, 1988). Veinte años después se dio la paradoja de que el sistema político venezolano logró integrar por completo las viejas formas de disidencia mostrándose, al mismo tiempo, cada vez más incapaz de hacer lo propio con el descontento de tipo moderno (Ellner, 1993).

ficado con un aparato institucional al que los sectores populares y un importante segmento de las clases medias consideraban culpable del incremento exponencial de la pobreza en los últimos veinte años (un 83 por ciento entre 1978 y 1998, como se puede apreciar en la gráfica 2). Socialmente, el monetarismo ortodoxo estaba siendo asociado cada vez más a otra forma de intervención política clásica: la represión.

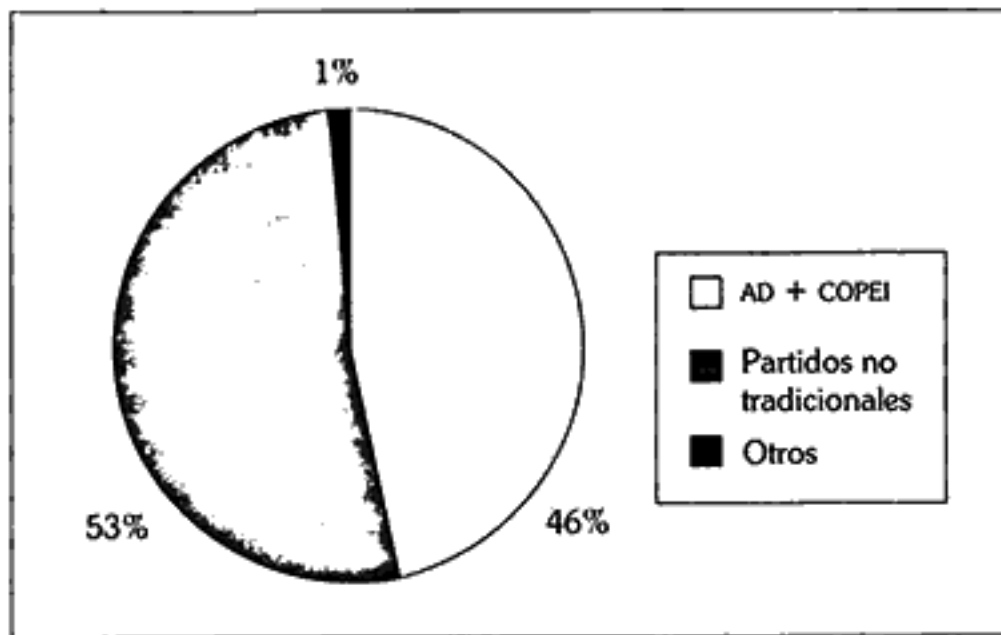
Gráfica 2
Evolución de la pobreza en Venezuela
(1978-1998)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Venezuela (<http://www.bcv.gov.ve>).

Así, en un marco de privatización y precariedad crecientes, la desesperación fue tal que los sectores sociales más golpeados empezaron a apostarle casi a cualquier forma de disidencia. Por eso –para sorpresa de los analistas– las revueltas continuaron proliferando en la misma medida en la que candidaturas electorales disidentes comenzaron a ser apoyadas. En este sentido, las elecciones presidenciales de 1993 marcaron un auténtico hito: por primera vez en 35 años la abstención se equiparó a un voto sistémico que, al mismo tiempo, fue superado por los partidos no tradicionales (ver gráficas 1 y 3).

Gráfica 3
Comparación del voto entre los partidos tradicionales y no tradicionales en las elecciones presidenciales de 1993



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Nacional Electoral (<http://www.cne.gov.ve>).¹⁰

Coincidencia o no, precisamente esos fueron los años en los que las calles de las grandes ciudades (sobre todo, Caracas) comenzaron a llenarse de vendedores ambulantes, algo inaudito en un país que, veinte años antes, había llegado a tener un PIB equivalente al de Italia (López Maya, 1999).

La economía informal –diríase que paralela– se disparó frente al colapso de la formal,¹¹ no sólo como receptora de mano de obra desempleada sino como asignadora de recursos, incluido el crédito a pequeña escala (Barrantes, 1998; Lacabana, 1993). Una verdadera sociedad alternativa comenzó así a delinearse como consecuencia de la incapacidad de los sistemas político y económico oficiales para integrar.

Es algo que ocurrió a casi todos los niveles. A la Iglesia Católica, por ejemplo, le fue imposible asumir de la noche a la mañana la enorme deuda social de la que –en menos de seis años– se desentendió el Estado. Fue un momento caracterizado por una inusitada revitalización del *Cristianismo de Liberación*,¹² pero

¹⁰ Dentro del rubro “Partidos no tradicionales” están incluidos los 16 grupos y organizaciones que apoyaron la candidatura de Rafael Caldera y La Causa R. Su evolución fue excelentemente estudiada por Margarita López Maya (1996).

¹¹ Sólo entre 1990 y 1998 el sector informal empleó a un 11 por ciento más de trabajadores en edad productiva pasando de representar el 38.6 por ciento de la economía al 43 por ciento (<http://www.oit.org.pe>).

¹² El concepto es de Michael Löwy (1998). Para ampliar con respecto a la especificidad venezolana, consúltese lo expuesto por Maurice Philippe Brunner Seco (1997).

también por la proliferación de multitud de sectas evangélicas, hasta entonces prácticamente ajenas a la realidad venezolana (Pollak-Eltz, 1991). Con todo, no bastó, las redes informales tejidas en los barrios y pueblos del país reorientaron su actividad con finalidades ajenas a la intervención social.

Poco a poco cada fracaso, rendición o abdicación institucional fue cubierto por la sociedad civil, a pesar incluso de su profunda atomización. Empezó a tenerse la sensación de que la forja de una nueva sociedad era un hecho. La participación constituía su rasgo más distinguible. A partir de ella y ante la ausencia de instancias más o menos formales de mediación comenzaron a ser socializados malestares presentes, pero también perspectivas de futuro. La solidaridad fue el fermento de una politización muy poco telenovelesca: todo dignidad, nada de *glamour*.

La Venezuela invisible estaba –parafraseando a Neruda– “despertando”.¹³ Las clases acomodadas y los extranjeros, sin embargo, se enteraban del deterioro socioeconómico, a lo sumo, a través de cifras. No había imágenes más allá de unos cuantos *ranchitos* incorporados a la impersonalidad de los paisajes urbanos. Más que nunca –durante los años noventas– en el país existía un verdadero *apartheid*, por supuesto informal, sin institucionalizar. Un Estado dentro del Estado que gestionaba la exclusión y el deterioro ejerciendo intermediaciones entre actores contrapuestos. Un Estado, si cabe, más Estado que el propio Estado. Un embrión de Estado que, al no importar lógicas y procesos ajenos, era políticamente más eficaz y socialmente más respetado que el Estado formal. Un aparato invisible que fundamentaba su agilidad en su propia naturaleza, es decir, en su falta de institucionalización de cargos, procesos y funciones, en su adaptabilidad a cada circunstancia puntual. Se trataba, en suma, de una práctica democrática (Roitman, 2003) considerada legítima por su proceder participativo, pero, sobre todo, por su contraposición creciente a los aparatos del Estado teóricamente reconocido como democrático.

Problemática del cambio

Una nueva hegemonía se encontraba, pues, en pleno proceso de construcción a mediados de la década de los noventas en Venezuela. Faltaba, sin embargo, un elemento capaz de cohesionar los anhelos –en realidad muy simples– de una sociedad emergente: bienestar, transparencia, seguridad (pública y social) y apuesta por la producción nacional. Durante algunos años pareció que La Causa R podía convertirse en el catalizador necesario de una praxis democrática no institucionalizada. Las expectativas, no obstante, quedaron truncadas tras la implosión del partido en 1997 que provocaría el fenómeno Chávez.

¹³ Pablo Neruda, en su “Canto a Bolívar” se refiere a la tradición venezolana de lucha política y social en unos versos hermosos que en su parte final dicen: “(...) Yo conocí a Bolívar/Una mañana larga/En Madrid./En la Boca del Quinto Regimiento./Padre, le dije./¿Eres o no eres o quién eres?/Y mirando al Cuartel de la Montaña/Dijo: Despierto cada cien años/Cuando despierta el pueblo”.

En 1992, el entonces teniente coronel Hugo Chávez había dinamizado la estructura orgánica del movimiento popular. Su intento de golpe de Estado y su posterior asunción de responsabilidades supusieron el complemento simbólico ideal al *Caracazo*. Más allá de anécdotas puntuales, el mensaje fue sencillo: la sociedad debía prepararse para asumir la única de las responsabilidades que hasta ese momento no le había sido "transferida" por un Estado en *deconstrucción*, la política. Un sinfín de grupúsculos y organizaciones constituyeron entonces el producto de un deseo latente de transformación.

Cinco años después –a partir de su candidatura electoral– el ya ex militar Chávez volvió a ejercer una influencia decisiva en la evolución del movimiento popular (Arenas y Gómez, 2000). Antes de colocar a la sociedad venezolana ante el dilema de una elección maniquea hizo lo mismo con la izquierda política tradicional.¹⁴ El guión de la maniobra se repitió posteriormente casi en cada ocasión delicada que se presentó. Chávez politizó primero el malestar para presentarse después como la única solución viable. En un país de institucionalización débil y tradición católica como Venezuela, esa combinación de carisma y milenarismo funcionó.

El ex teniente coronel se convirtió así en catalizador de frustraciones y cohesionador de esperanzas. Lo más paradójico es que logró vehicular, incluso, sentimientos en teoría absolutamente contrapuestos, desde los deseos de transformación de los sectores populares hasta las aspiraciones bonapartistas de parte de las clases medias.¹⁵ Los índices de aceptación del proyecto *bolivariano* fueron tan amplios como el derrumbe del "viejo orden". En las elecciones de 1998, la circunstancia verdaderamente notable no fue el 56.2 por ciento de votos obtenido por Chávez sino el colapso de los partidos tradicionales.

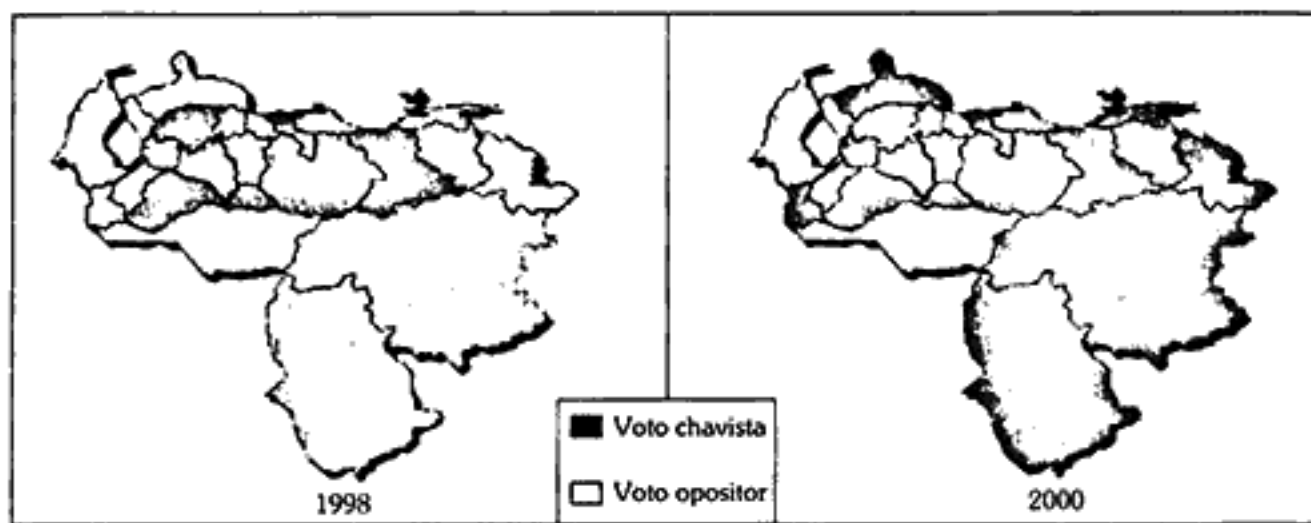
Otra circunstancia significativa fue que a pesar que el descontento existente en Venezuela era mayúsculo desde finales de la década de los ochentas, nadie –incluyendo a los actores políticos, sociales, económicos e incluso académicos– hubiera

¹⁴ No sólo La Causa R acabó escindida. El MAS (el otro gran partido de la izquierda venezolana, que a mediados de la década de los noventas era el sostén principal del gobierno de Rafael Caldera) también terminó fracturado: un sector mayoritario (popularmente conocido como *MAS menos*) se mantuvo firme en su oposición a Chávez mientras que otro sector, minoritario (el *MAS más*), se terminó separando para integrarse en el *Polo Patriótico*.

¹⁵ Sociológicamente hablando los apoyos a Chávez en las elecciones de 1998 resultaron mucho más heterogéneos que en años posteriores, cuando se fue delineando un perfil mucho más definido del elector *chavista*. El año de su llegada al poder, el voto *bolivariano* fue más un "voto protesta" que cualquier otra cosa. A Chávez le apoyaron, sobre todo, los sectores populares; pero también un porcentaje importante de las clases medias e incluso uno, reducido, del grupo dominante. Todos, por supuesto, en defensa de la "democracia", concepto que para los unos significaba participación y transparencia, para los otros, freno a la degradación política, social y económica del país y para los más acomodados, mantenimiento de sus privilegios rentistas. La contradicción llegó a tal extremo que, algunos de sus principales apoyos financieros iniciales, Chávez los encontró en la banca extranjera e, incluso, en algunas de las familias más acomodadas del país (Antiescuálidos, 2002).

esperado una situación como la que se delineó entre 1998 y 2004.¹⁶ En apenas seis años la vieja estructura clientelista quedó reducida al control de dos Estados (ver gráfica 4), el 14 por ciento de los municipios del país y un puñado de deslavazados enclaves de poder fáctico unificados, tan sólo, por su carácter rentista. Irrefutable: la degradación socioeconómica logró lo que no habían conseguido decenios de violencia política (Garrido, 1999).

Gráfica 4
Evolución del voto regional en Venezuela
(1998-2000)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Nacional Electoral (<http://www.cne.gov.ve>).

La Revolución Bolivariana constituye, de hecho, un peculiar fenómeno tanto en términos de la acción que catalizó como de la reacción que generó. Su carácter democrático –tanto por lo participativo como por lo procedimental– se encuentra fuera de toda duda. No es ésta la única circunstancia que, sin embargo, caracteriza al proceso. Los residuos de corporativismo a los que se enfrentó el *chavismo* determinaron, en buena medida, la peculiar marcha de un proyecto articulado a partir de unos principios muy generales –incluso vagos– adaptados con una agilidad política impresionante a cada circunstancia puntual.

La oposición –he aquí otro *quid* de la cuestión– ni fue, ni es, ni probablemente será tan homogénea como suele ser mediáticamente presentada. En términos

¹⁶ Tras la debacle opositora en las elecciones de 2000 quedaron fuera del control del Gobierno las grandes empresas privadas (y su correa de transmisión, los medios de comunicación), las multinacionales extranjeras que habían adquirido antiguas empresas públicas, la directiva de las empresas públicas estratégicas como la petrolera Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) o la minera Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y ciertos sectores de las cúpulas eclesiástica, militar y sindical. A partir de 2003, la influencia de la mayoría de los reseñados poderes fácticos fue desapareciendo, quedando aislada o, en el mejor de los casos, articulando relaciones redefinidas con el Gobierno.

generales se puede decir que está compuesta por dos grandes polos: uno de tradición clientelista y el otro de tipo rentista. El primero de ellos está formado por la vieja burocracia estatal, regional y sindical, mientras que, el segundo lo conforman las cúpulas tecnócrata, empresarial, eclesial y, en menor medida, militar. Durante decenios los unos tuvieron una relación más colectiva que los otros con el poder político tradicional.

Una vez hundidos los viejos partidos políticos –que fueron elementos estructuradores de este tipo de relaciones– ambos polos se quedaron sin el lubricante que hasta entonces les había hecho funcionar e incluso competir entre sí. Se impuso, así, una colaboración orientada a la supervivencia. Entre 1998 y 2000 el liderazgo opositor fue ejercido por el sector clientelista a partir de la única base efectiva de poder que le quedaba: la regional. Tras la aprobación de la Constitución de 1999, y sobre todo de la *Ley Habilitante*,¹⁷ se produjo un relevo en la dirección opositora, poco a poco asumida por su componente rentista.¹⁸

El momento clave fueron las *Megaelecciones* de 2000. Bajo la nueva Constitución, los venezolanos renovaron simultáneamente todos los cargos de elección popular. Fue entonces cuando la posibilidad de una reproducción política del viejo clientelismo se evaporó, al menos, en los términos tradicionales (ver gráficas 1, 4 y 5).¹⁹

El cambio en la dirección opositora propició una redefinición del mismo pero a partir de unos parámetros contrapuestos a los del periodo 1958-1998. Su escenario continuó siendo el Estado pero su financiación comenzó a ser, sobre todo, privada.

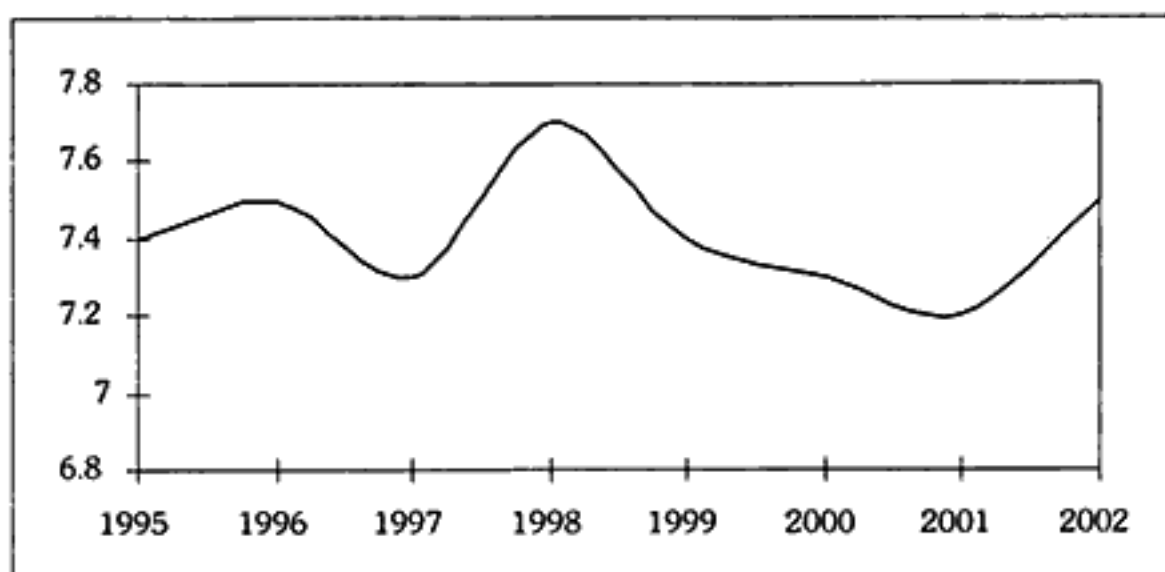
¹⁷ La *Habilitante* –aprobada en 2001– fue una disposición jurídica que le permitió al ejecutivo legislar por decreto en 49 áreas consideradas estratégicas. Muchas fueron malintencionadamente presentadas por la oposición como un atentado contra la propiedad privada. Así, iniciativas como la ley de tierras, la de pesca, la fiscalización de las subvenciones a privados, la de reforma en los criterios de concesión de obras públicas o la de asunción de la deuda bancaria por parte de las entidades de crédito y no del Estado, sirvieron de excusa para el inicio de una agresiva e irresponsable escalada opositora que tuvo sus dos momentos álgidos en el intento de golpe de Estado de abril de 2002 y en el paro petrolero de diciembre del mismo año. Para algunos autores, la “Guerra de Baja Intensidad” en su versión venezolana (Roitman, 2002).

¹⁸ Este fenómeno es observable, incluso, en términos del candidato presidencial escogido para cada ocasión. En 1998 el seleccionado fue Henrique Salas Römer, posterior gobernador de Carabobo y perteneciente a una de las familias que, históricamente, han controlado política, social y económicamente dicho estado. En 2000, el escogido fue Francisco Arias Cárdenas, ex gobernador del estado Zulia pero sobre todo ex militar y ex golpista junto al propio Chávez (en 1992). Se trató sin duda de una solución de compromiso que da cuenta del momento de transición por el que entonces se atravesaba. Actualmente, de hecho, son pocos los que dudan que el próximo candidato presidencial opositor esté ligado al empresariado rentista clásico.

¹⁹ La vieja estructura corporativa –tanto en su versión rentista como en la clientelista– no se basó única y exclusivamente en el desvío o asignación fraudulenta de fondos públicos. La pérdida de parcelas de poder, sin embargo, impidió la reproducción –legal e ilegal– de redes de poder, en todo caso muy debilitadas desde los años ochentas. La corrupción no es, pues, sino un indicador más pero, como puede verse en la gráfica 5, muy locuaz. Sus dos incrementos a lo largo de los últimos años han tenido que ver con la inminente llegada de Chávez al poder y con el conculso 2002.

Desde que Chávez asumió el poder, en efecto, se había mostrado incapaz de resolver el problema que planteaban los residuos de la vieja estructura clientelista, aún incrustada en el seno del Estado. A partir de 2000, la situación empeoró pues comenzó a perder su control político. En ese contexto, la nueva dirigencia opositora (sintiendo amenazados sus intereses rentísticos tradicionales debido al asentamiento social y electoral del *chavismo*²⁰) optó por minar la gobernabilidad del país utilizando para ello los enclaves clientelistas ahora bajo su control informal.

Gráfica 5
Evolución de la corrupción en Venezuela
(1995-2002)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de *Transparency International* (<http://www.transparency.gov>).²¹

Dicha estrategia contó con la connivencia e incluso el apoyo explícito de grupos dirigentes y empresariales multinacionales con intereses en Venezuela (Fernández, 2002). Es un guión que, a partir de ese momento y hasta 2004, no parará de repetirse: la degradación objetiva de las condiciones de vida será irresponsable-

²⁰ En las elecciones de 2000 la distancia entre *chavismo* y oposición se había incrementado en un 6 por ciento, pasando a ser de un considerable 22.24 por ciento (59.76 por ciento contra un 37.52 por ciento). A nivel territorial, por su parte, ya se ha visto cómo la oposición había pasado de controlar 16 estados (de los 23 con los que cuenta el país) a tan sólo 6 (ver gráfica 4). El país no estaba, por lo tanto, dividido en dos partes iguales como tendió a presentarlo la prensa nacional e internacional. En términos de apoyos, la proporción era cercana a 2 por 1. Otra cosa muy distinta es que ambos bandos contaran con parecida capacidad de bloqueo.

²¹ *Transparency International* calcula el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) desde 1994. Desde entonces se ha doblado el número de países analizados y matizado los criterios metodológicos. No ha variado, como sea, la orquilla básica que considera 10 como "no corrupto" y 0 como "muy corrupto". En este gráfico ha habido que invertir dicha escala con el objeto de generar una percepción gráfica ajustada a la realidad de la evolución de la corrupción en Venezuela. Hacer lo contrario hubiera supuesto ver más corrupción cuando menos hubo, y viceversa.

mente provocada por los poderes fácticos y a la vez demagógicamente explotada por sus propios medios de comunicación. La abrupta irrupción de este nuevo clientelismo "privatizado" estuvo a punto de costarle una guerra civil al país en 2002, uno de los casos más graves de ingobernabilidad inducida en América Latina en este periodo.

Durante el intento de golpe de Estado y el paro petrolero de 2002 los acontecimientos no llegaron a desbordarse gracias a la *intervención estabilizadora* del propio Chávez. El gobierno no logró evitar, sin embargo, que la situación socioeconómica del país —que en años precedentes había logrado ser ligeramente reconducida— se degradara rápidamente.²² Dicha coyuntura, añadida a la pesada rémora estructural y, desde luego, a las deficiencias administrativas y comunicacionales del propio *chavismo* generaron, sobre todo en el exterior, una irreal sensación de impopularidad presidencial. No fue casual, al *chavismo* le ha costado casi tres años lograr un control mínimo, efectivo, pero sobre todo políticamente seguro de la Administración Pública. A pesar de las sucesivas mayorías electorales su poder nunca ha sido absoluto, y sobre todo entre 2001 y 2004 la gobernabilidad no ha estado garantizada. Ha sido el precio a pagar por no haberle dado prioridad desde el principio al control político del viejo aparato clientelista. Si a esto le añadimos la ineficaz política comunicacional del Gobierno entenderemos por qué hasta el *referendum* de 2004, fuera de Venezuela, la polarización solió confundirse con equilibrio o, peor aún, con una supuesta e irreal mayoría opositora.

²² Desde 1998 algunos pequeños pasos habían sido dados. A nivel político-jurídico, por ejemplo, habían sido implantados un cuarto y quinto poderes (respectivamente, "ciudadano" y "electoral") encargados de complementar a los tradicionales legislativo, ejecutivo y judicial a partir de una función de control. Consecuencia de ello fue, muy probablemente, la significativa reducción de la corrupción que se dio entre 1998 y 2001 (ver gráfica 5). Desde una perspectiva macroeconómica los avances se habían hecho efectivos, sobre todo, en dos rubros: el control de la inflación (que pasó del 29.9 por ciento en 1998 al 7.5 por ciento en 2001) y el aumento de las reservas monetarias. Ambas circunstancias frenaron la pérdida de valor de la moneda nacional y con ello la de poder adquisitivo que, desde 1983, habían padecido los ciudadanos. Un beneficio adicional: como consecuencia de lo anterior, el "Riesgo País" de Venezuela era de los más bajos de América Latina ("A4" —donde "A" es poco riesgo y "D", mucho, (<http://www.cofacrating.com>). Otro elemento medible: Venezuela adelantó cuatro lugares en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD. Último detalle: la implantación de las "Escuelas Bolivarianas" propició la escolarización de un 25 por ciento más de niños en menos de tres años. Tras el intento de golpe de Estado de 2002, sin embargo, los citados avances se fueron al traste en menos de un año. Para empezar, la inflación volvió a dispararse en un 31.39 por ciento entre abril de 2002 y abril de 2003. La primera en resentirse fue la moneda nacional que, a principios de 2003, terminó perdiendo su convertibilidad como consecuencia de la introducción de un estricto control de cambios orientado a evitar una depreciación aún mayor de la divisa. Primera consecuencia obvia: la exponencial pérdida de poder adquisitivo que padecieron los venezolanos. Segunda consecuencia: el "Riesgo País" se convirtió en uno de los más altos de América Latina (pasó del nivel "A4" al "D", algo inaudito). Tercera consecuencia: Venezuela retrocedió ocho puestos en el IDH. Entre los efectos sociales (rápidamente perceptibles por la ciudadanía) pueden observarse los siguientes: la criminalidad y la corrupción —hasta entonces en descenso— volvieron a ubicarse en niveles anteriores a 1998 (ver nota 5 y gráfica 5); servicios públicos como la educación, la salud y el transporte sufrieron un deterioro notable, y por si todo eso fuera poco, durante todo 2003 hubo serios problemas en términos de abasto alimentario (PROVEA, 2003).

En el reseñado contexto, además, la hegemonía social *chavista* difícilmente se ha podido traducir en una superación de las trabas estructurales: es algo que apenas ha comenzado a convertirse en una realidad en 2004.²³ Actualmente, y pese a la aparente calma, fidelidades internas y clientelismo "privatizado" siguen suponiendo amenazas potenciales para la gobernabilidad y, por ende, para el crecimiento socioeconómico. A este respecto no debe olvidarse que, pese a lo rotundo de los resultados electorales más recientes, en Venezuela siguen existiendo dos propuestas políticas contrapuestas que no logran redefinir la estructura del Estado en términos consensuales.

Por eso, en la actualidad, la cuestión de fondo no sólo radica en saber si pudieran estar quedando sentadas las bases de un entendimiento institucional duradero, sino en si está teniendo lugar un proceso análogo en términos de refundación de un modelo de desarrollo y, por tanto, de una integración social redefinida. Esto es muy importante pues no debe olvidarse que, pese a las apariencias formales, la sociedad venezolana continúa replegándose sobre sí misma. Para muestra, dos botones: la abstención electoral no frena su crecimiento, mientras que la economía informal ocupa ya a más ciudadanos que la formal.²⁴

Da la impresión, en efecto, de que más allá de los avatares sociopolíticos oficiales, las dificultades de institucionalización de la praxis democrática popular están contribuyendo a su revitalización social al margen del sistema. No siempre existe, de hecho, una relación subordinada de los grupos ciudadanos con uno de los dos polos enfrentados en las instituciones: la mayoría se posiciona, es cierto, pero no se somete. De ahí las dificultades a las que –incluso las nuevas redes clientelistas "privatizadas"– se enfrentan a la hora de detectar canales de intermediación capaces de redefinir la gobernabilidad.

Por el momento –y aunque existen indicios de que todo eso está cambiando muy lentamente– la participación, la producción o la negociación siguen teniendo lugar al margen de las instituciones. Es en detalles así donde se percibe que lo que la resistencia a la democratización está liberando es la creatividad contenida –y reprimida– en la exclusión, un proceso parecido al de otros países de América Latina. El *deseo constituyente* resulta, de esta manera, manifiesto entre las masas. Precisamente por eso da la impresión de que la gobernabilidad sólo será un hecho en Venezuela cuando se logre institucionalizar un proyecto nacional que habrá de subordinar la democracia ideal a la democracia realmente existente. ¿Coadyuvarán las nuevas perspectivas socioeconómicas? Está por verse...

²³ En 2004, el crecimiento de la economía venezolana fue del 8.5 por ciento, uno de los más altos del mundo.

²⁴ A pesar de la enorme movilización política que generó el *referendum* de 2004, un 39.43 por ciento de los ciudadanos con derecho a voto se abstuvieron. Por otra parte y según datos de la OIT (<http://www.oit.org.pe>), el empleo informal en Venezuela sobrepasó el 52 por ciento de la población económicamente activa.

Bibliografía

- ANTIESCUALIDOS (2002), "El Golpe de Estado en Venezuela", Caracas, en <<http://www.antiescualidos.com>>.
- ÁLVAREZ, Lourdes, Helia Isabel DEL ROSARIO y Jesús ROBLES (1999), *Política social: exclusión y equidad en Venezuela durante los años noventa*, Caracas, Nueva Sociedad.
- ARENAS, Nelly (2000), *Las visiones del petróleo: 1940-1976*, Caracas, Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), Universidad Central de Venezuela.
- y Luis GÓMEZ (2000), *El imaginario redentor: de la Revolución de Octubre a la Quinta República Bolivariana*, Caracas, CENDES, Universidad Central de Venezuela.
- BAPTISTA, Asdrúbal (1997), *Teoría económica del capitalismo rentístico: economía, petróleo y renta*, Caracas, IESA.
- BARRANTES, César A. (1998), "Pensar la economía popular en Venezuela: cinco miradas inconclusas", en *Frónesis*, Maracaibo, vol. 5, núm. 2.
- BRICEÑO, Roberto (1990), *Los efectos perversos del petróleo*, Caracas, FACV.
- BRUNNER SECO, Maurice Philippe (1997), *Aproximación a la historia social y eclesial de la corriente venezolana de la Teología de la Liberación*, Caracas, tesis de grado de la Universidad Central de Venezuela.
- CARBALLO, Gastón (1995), *Clase dominante y democracia representativa en Venezuela*, Caracas, Tropykos.
- CORONIL, Fernando (1997), *The Magical State: nature, money and modernity in Venezuela*, Chicago, The University of Chicago Press.
- CRISP, Brian (1996), "The rigidity of democratic institutions and the current legitimacy crisis in Venezuela", en *Latin American Perspectives*, Thousand Oaks, California, SAGE Publications, vol. 23, núm. 3.
- DE LA CRUZ, Rafael (1989), "Nuevos movimientos sociales en Venezuela", en Daniel CAMACHO y Rafael MENJÍVAR, *Los movimientos populares en América Latina*, México, Siglo XXI.
- DENIS, Roland (1999), *Los fabricantes de la rebelión: movimiento popular, chauismo y sociedad en los años noventa*, Caracas, Primera Línea/Nuevo Sur.
- DÍAZ AMAYA, Manuel (1983), *Una aproximación al consumismo y a sus repercusiones psicosociales: el caso de Venezuela*, Caracas, tesis de grado de la Universidad Central de Venezuela.
- ELLNER, Steve (1988), *Venezuela's Movimiento Al Socialismo: from guerrilla defeat to innovate politics*, Durham, Duke University Press.
- (1993), "The Venezuelan Left: from years of prosperity to economic crisis", en Barry CARR, *The Latin American Left: from the fall of Allende to Perestroika*, London, Westview Press.
- FERNÁNDEZ, José Manuel (2002), "La participación de España y de EE UU en el Golpe de Estado de Venezuela", en <<http://www.pce.es/mundoobrero>>.
- GARRIDO, Alberto (1999), *Guerrilla y conspiración militar en Venezuela*, Caracas, José Agustín Catalá.

- GROHMANN, Peter (1996), *Maracao y su gente: movimiento popular y autogestión en los barrios de Caracas*, Caracas, Nueva Sociedad.
- GUTIÉRREZ, María Teresa (1990), *Sobrevivencia y sectores populares en Venezuela*, Caracas, CENDES, Universidad Central de Venezuela.
- HILLMAN, Richard S. (1994), *Democracy for privileged: crisis and transition in Venezuela*, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers.
- y Elza CARDOSO (1997), *De una a otra gobernabilidad: el desbordamiento de la democracia en Venezuela*, Caracas, Tropykos.
- LACABANA, Miguel Ángel (1993), "La calle como puesto de trabajo: reflexiones acerca de la relación Estado-sector informal urbano", en *Cuadernos del CENDES*, Caracas, CENDES, Universidad Central de Venezuela, vol. 10, núm. 22.
- LÓPEZ MAYA, Margarita (1996), "Nuevos actores en la crisis del sistema político venezolano: La Causa R, Convergencia y el MBR-200", en *Cuadernos del CENDES*, Caracas, CENDES, Universidad Central de Venezuela, vol. 13, núm. 32.
- (1999), *Lucha popular, democracia y neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste*, Caracas, Nueva Sociedad.
- LÖWY, Michael (1998), *La guerre des dieux: religion et politique en Amérique Latine*, Paris, Editions du Félin.
- POLLAK-ELTZ, Angelina (1991), "La religiosidad popular en Venezuela", en *Anthropos*, Caracas, vol. 12, núm. 22.
- PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA) (2003), *Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual octubre 2002-septiembre 2003*, Caracas, PROVEA.
- ROITMAN, Marcos (2002), "Venezuela, el lenguaje de la desestabilización", en <<http://www.ucm.es/info/solidarios/ccs>>.
- (2003), "¿Hasta cuándo Venezuela?", en *La Jornada*, México, 12 de enero.
- SCOTT, James C. (1990), *Domination and the Arts of Resistance*, Yale, Yale University Press.
- SILVA MICHELENA, José Agustín (1970), *La crisis de la democracia*, Caracas, CENDES, Universidad Central de Venezuela.

Diciembre de 2004